

## **LA OFENSIVA MILITAR DEL IMPERIO Y LOS INTERESES ESTRATÉGICOS**

**Enric Prat**

El Gobierno de Estados Unidos ha desencadenado una ofensiva militar en el mundo, cuyas piezas fundamentales son: una nueva doctrina militar estratégica, un sistema de defensa contra misiles y la intervención militar contra una serie de organizaciones y estados. La Administración Bush asume en solitario las tareas derivadas de esta ofensiva militar, prescindiendo de Naciones Unidas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y confiando exclusivamente en sus propios medios militares, que han sido reforzados con un aumento espectacular de los gastos militares (el presupuesto federal para el año fiscal 2002-2003 incluye un gasto militar de 379.000 millones de dólares, que supone casi el 40% de todo el gasto militar mundial) y el desarrollo de una nueva generación de armamentos (aviones espía teledirigidos, armas de precisión...).

Los objetivos que persigue conseguir con esa ofensiva militar son: el control de petróleo, favorecer los intereses económicos del complejo tecnológico-militar-industrial (el principal beneficiario de los presupuestos militares del estado y de la ofensiva guerrera del Imperio serán las empresas privadas que desarrollen los programas de armamentos del Pentágono, obteniendo ganancias de miles de millones de dólares) y garantizar que la globalización siga adelante con seguridad, sin cuestionamientos importantes y bajo su dirección (después de su victoria en la guerra fría, Estados Unidos es la única superpotencia militar y con la Administración Bush, con su ofensiva militar, pretende reforzar su hegemonía en el mundo a largo plazo).

En su discurso sobre el estado de la nación de enero de 2002, Bush afirmó que la guerra contra el terrorismo será una guerra planetaria de larga duración y precisó cuales eran los enemigos: Al Qaeda y otras organizaciones islamistas como Hamás, Hezbolá y Yihad Islámica; y los gobiernos de Irán, Irak y Corea del Norte, a los que denominó el "eje del mal", que amenazan la paz y la estabilidad mundial, entre otras razones porque poseen armas de destrucción masiva (biológicas, químicas y nucleares).

No hay pruebas suficientes de que en estos países se produzcan armas de destrucción masiva y mucho menos que las piensen utilizar para atacar a Estados Unidos o ponerlas en manos de grupos terroristas. También se exagera sobre la posible amenaza futura de los misiles de esos estados, ya que ni disponen ni tienen posibilidades de desarrollar la tecnología suficiente para fabricar misiles estratégicos de largo alcance (superior a 3.500 km.), que son los que pueden hacer creíble un ataque con garantías.

A pesar de ello, el presidente Bush envió al Congreso (el 20 de septiembre de 2002) un documento, titulado *La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos*, en el que se expone la nueva doctrina militar estratégica de Estados Unidos, cuya orientación es el ataque preventivo, que consiste en destruir la amenaza de organizaciones terroristas y países enemigos antes de que se concrete. Se defiende la acción militar en solitario para la defensa de sus intereses nacionales, dejando claro que no se sentirán obligados a respetar las instrucciones y los acuerdos de las organizaciones internacionales. El ataque preventivo contra los enemigos incluye, si se trata de organizaciones terroristas, la destrucción de su armamento y la captura de sus activistas, y, si se trata de un estado, el desmantelamiento de sus arsenales y sus fuerzas armadas, así como el derrocamiento de su régimen político.

La “guerra preventiva” es una doctrina militar de ataque, agresiva. No es defensiva ni persigue la disuasión (que caracterizó la época de la guerra fría). Es una doctrina que vulnera la legalidad internacional, ya que la Carta de las Naciones Unidas sólo contempla el uso de la fuerza en legítima defensa en caso de que se produzca un ataque armado o porque lo decida el Consejo de Seguridad, pero no recoge el ataque preventivo frente a amenazas potenciales o inminentes. Si se impone en la práctica la guerra preventiva, otros países pueden optar por seguir el mismo camino y lanzar ataques preventivos contra sus adversarios. Además, puede fomentar la proliferación de armas de destrucción masiva en los países que se sientan amenazados por la guerra preventiva, como una forma de defenderse mejor de ella.

La doctrina de la “guerra preventiva” se complementa con una revisión de la postura nuclear y el “escudo antimisiles”.

El Gobierno de Estados Unidos pidió al Pentágono que elaborara un documento en el que se revisara la postura nuclear, indicando que debía contener planes de contingencia para el uso de armamento nuclear y la fabricación de armas nucleares de pequeño tamaño capaces de responder a un ataque nuclear, biológico o químico. Según el informe, la nueva doctrina consiste en amenazar a los países del “eje del mal” con un ataque nuclear si estos usan armas de destrucción masiva o bien si suceden acontecimientos como un ataque de Corea del Norte contra Corea del Sur o de Irak contra Israel. El informe indica que el Pentágono debería estar preparado para usar armas nucleares en el conflicto árabe-israelí. El documento aboga por la creación de nuevas tecnologías nucleares: el desarrollo de misiles nucleares capaces de penetrar en el subsuelo para destruir complejos militares subterráneos altamente protegidos y la mejora y desarrollo de los sistemas tecnológicos que guían los misiles hacia objetivos elegidos. Todo ello, concluye el informe, puede obligar a Estados Unidos a iniciar otra vez pruebas nucleares.

George Bush apoyó la nueva doctrina nuclear planteada por el Pentágono, que profundiza en una doctrina que se articuló por primera vez durante la presidencia de su padre.

La posibilidad de una “disuasión asimétrica” se planteó a raíz de la Guerra del Golfo, ante el riesgo de que Irak utilizara armas químicas y bacteriológicas contra las tropas estadounidenses o contra Israel. Bush dejó entrever que no descartaba en ese caso la hipótesis de una represalia nuclear. ¿Qué haría la actual Administración norteamericana si tras atacar militarmente a Irak obtiene una respuesta con armas de destrucción masiva?. ¿Qué haría el gobierno de Ariel Sharon si tras una eventual operación militar de Estados Unidos en Irak el régimen de Sadam Husein decide atacar Israel?. Hay que temer lo peor, es decir, que podrían usar las armas nucleares para ganar la guerra.

En julio de 1999, Bill Clinton firmó la directiva presidencial sobre el Sistema Nacional de Defensa contra Misiles (NMD), conocido como “guerra de las galaxias”. La Administración Bush ha considerado que la nueva situación internacional de inseguridad provocada por los atentados del 11-S justifica la creación del NMD. Para poder desarrollar el nuevo escudo antimisiles, decidió retirarse (diciembre 2001) del Tratado de Defensa contra Mísiles (ABM), suscrito por la URSS y Estados Unidos en 1972, en el cual se establecía que las dos superpotencias renunciaban a desarrollar sistemas de defensa contra misiles. El nuevo sistema de defensa ha sido justificado para protegerse de eventuales ataques con misiles por parte de los países considerados hostiles, actualmente denominados “el eje del mal”, ante la amenaza de que puedan convertirse en nuevas potencias nucleares irresponsables y de sus posibles alianzas con terroristas.

Hasta ahora, se han realizado seis pruebas del mencionado sistema, cuatro de ellas con éxito. Están previstos para el futuro nuevos ensayos. El NMD, según los planes del Pentágono, contará con una red mundial de sistemas de vigilancia y escucha formada por radares en tierra y satélites, capaz de detectar cualquier misil lanzado en dirección al territorio de Estados Unidos y facilitar la entrada en acción de misiles destinados a interceptar y destruir en pleno vuelo al misil atacante.

El NMD y la eliminación del ABM merecen un conjunto críticas. El peligro de guerra atómica, siempre presente desde que se inventaron las armas nucleares y actualmente por la existencia de un elevado arsenal nuclear, se acrecienta con la ampliación del número de países miembros del club nuclear (poseen armas nucleares Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Reino Unido, Israel, India y Pakistán). Pero el NMD no evita los peligros de proliferación nuclear, sino todo lo contrario. Los sistemas de defensa contra misiles reducen la capacidad de disuasión nuclear del adversario, aumentan la confianza en la propia invulnerabilidad, acrecentando las tentaciones de atacar con seguridad al enemigo sin sufrir represalias. Por el contrario, la inexistencia de escudo antimisiles hace que un país se sienta más vulnerable ante un posible ataque nuclear y, por tanto, tendrá pocos incentivos para lanzar una ofensiva. Es el razonamiento de la disuasión o la “*destrucción mutua asegurada*”, es decir, si dos países creen

que tanto el uno como el otro pueden atacarse y destruirse por completo, ninguno de los dos los hará. El NMD rompe con esas concepciones.

Por otra parte, el NMD, al quebrar el equilibrio de los acuerdos ABM, puede provocar una reacción en cadena que desemboque en una nueva carrera de armamentos, debido a que ante la hipótesis de una guerra, el escudo antimisiles sólo podría ser superado con un ataque masivo que lo colapsara. Lo cual hace más probable que otros países opten por aumentar su número de misiles o de cabezas nucleares para hacer vulnerable el NMD. Todo lo cual, podría inducir a su vez a Estados Unidos a tomar medidas para contrarrestar el aumento de la capacidad nuclear de sus adversarios y entrar así en una nueva escalada armamentista.

En cualquier caso, la solución a la proliferación nuclear y al peligro de guerra no es el mantenimiento del monopolio nuclear por parte de unos pocos países, sino el desarme nuclear total de todos.

## II

La “guerra preventiva” recoge la experiencia de intervenciones militares desde el 11-S, sobre todo la de Afganistán. Es una doctrina militar para ser aplicada a corto plazo, como lo demuestra los planes de guerra contra Irak..

Tras los atentados del 11-S, la Administración Bush catalogó los mismos como un acto de guerra, anunció una ofensiva militar sostenida hasta victoria total de Estados Unidos y señaló como primera prioridad de la guerra contra el terrorismo la detención o eliminación de los militantes de Al Qaeda y el derrocamiento del régimen talibán, por haberlos amparado.

Las operaciones militares contra Al Qaeda y los talibanes se han extendido por toda una serie de países (Filipinas, Georgia, Somalia...), pero no han conseguido detener a Bin Laden y la mayoría de líderes talibanes, ni tampoco han impedido que se produzcan nuevos atentados, cuya autoría se atribuye, por parte del gobierno de Estados Unidos, a la red de grupos vinculados a Al Qaeda. Durante el mes de octubre se han producido diversos atentados en Yemen, Kuwait, Indonesia y Filipinas, que han provocado centenares de muertos y heridos. Ante esta oleada de atentados, se prevé una intensificación de las operaciones antiterroristas de las fuerzas militares norteamericanas.

Tras el derrocamiento del régimen talibán, la Administración Bush ha indicado que el siguiente objetivo en esta guerra global es conseguir el derrocamiento del régimen de Sadam Husein. La justificación dada por el gobierno estadounidense es que solo así se elimina la amenaza que representa la posesión y desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Irak. La Administración Bush cree que una intervención militar contra Irak es factible porque, a

diferencia de la guerra de 1991, el ejército iraquí está más debilitado (tras una década de bloqueo y sanciones casi no tiene fuerza aérea, sus tanques fueron en gran parte destruidos en 1991 y los pocos que quedan están obsoletos y sin repuestos) y Estados Unidos, por el contrario, dispone en este momento de una capacidad de destrucción mucho mayor (por ejemplo, en 1991 sólo el 10% de sus bombas eran *inteligentes*, mientras que ahora lo son el 80%).

Partiendo de la convicción de que una “guerra preventiva” contra Irak puede obtener el éxito, la Administración Bush ha dado toda una serie de pasos en la dirección de crear las condiciones políticas y militares favorables para la intervención militar exitosa.

La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos autorizaron (octubre de 2002) al presidente Bush a que use la fuerza militar contra el régimen de Sadam Husein si lo considera necesario.

La CIA desarrolla operaciones encubiertas en el interior de Irak y cuenta con la autorización de Bush para asesinar a Sadam Husein.

El gobierno estadounidense apoya políticamente, financia y proporciona armas a los grupos de oposición al régimen de Sadam Husein y participa directamente en la configuración de un liderazgo alternativo (en julio de 2002 hubo una reunión en Londres de unos 200 iraquíes en el exilio, a la que asistieron diplomáticos británicos y estadounidenses; representantes de los grupos de oposición se reunieron en Washington, en agosto de 2002, con los subsecretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos para debatir la viabilidad de un ataque contra Irak).

Se han intensificado las tareas de preparación de la guerra: entrenamientos de las tropas, reforzamiento de las bases militares en los países cercanos a Irak, aceleración de la producción de misiles de alta precisión... Entre las diferentes opciones de estrategia bélica parece ser que se inclinan por la invasión masiva de Irak, en la que participarían unos 250.000 efectivos, con ataques desde tierra, mar y aire, bombardeando un amplio abanico de objetivos (instalaciones militares, rampas de misiles, centros de comunicación...) e invadiendo después el territorio por parte de los marines y los soldados.

Según *The New York Times*, el gobierno estadounidense está diseñando un plan para la transición en Irak tras la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein, en el que se sopesa la posibilidad de que un general de Estados Unidos se sitúe al frente del nuevo gobierno por un período de tiempo indeterminado. Todo hace pensar que esta opción ha sido contemplada después de analizar la experiencia de Afganistán, en la que el nuevo gobierno de Hamid Karzai no garantiza el orden fuera de la capital Kabul, y al comprobar la fragmentación,

debilidad y falta de liderazgo de los grupos de oposición al régimen de Sadam Husein, que tendría muchas dificultades para mantener unido el país ante las diferencias étnicas y religiosas presentes en Irak (kurdos, shiíes, sunís). ¿Qué consecuencias pueden ocasionar la implantación de un gobierno pro-norteamericanos en Irak y la presencia de tropas de Estados Unidos por un período largo de tiempo, en pleno mundo árabe, en un período histórico de graves enfrentamientos entre, por una parte, sectores amplios de las poblaciones árabes, algunos gobiernos como el iraquí y diversos grupos radicales islámicos, y, por otra, diversos gobiernos de países occidentales e Israel?. Sin lugar a duda, terribles.

Pero la operación militar contra Irak tiene bastantes dificultades, riesgos y cuenta con opositores de peso. El primer problema es que si el régimen de Irak, tras aceptar el regreso de los inspectores, sigue aceptando los planteamientos de la ONU y no obstaculiza las inspecciones, incluyendo los palacios presidenciales, será muy difícil de justificar una guerra contra Irak.

Además, la oposición al régimen de Sadam Husein está muy fragmentada, sin liderazgo y con proyectos diversos. Una cosa es articular una oposición externa, que sólo se manifiesta en los medios de comunicación occidentales, y otra, más difícil, conseguir una oposición interna que tenga fuerza e incidencia entre sectores amplios de la población iraquí. Que sectores de la población y del propio régimen estén descontentos con Sadam Husein no garantiza la articulación de una oposición y menos en momentos de inminente ataque occidental, que favorece el cierre de filas del régimen. El embargo de la ONU y las amenazas de guerra exterior provocan una adhesión de los ciudadanos iraquíes al régimen de Sadam Husein. Consciente de ello, el régimen organizó diversas manifestaciones ciudadanas en contra de las amenazas de ataque de Estados Unidos y convocó, el 15 de octubre de 2002, un referéndum para la reelección de Sadam Husein, que se ha convertido en un plebiscito de reafirmación patriótica y de rechazo a Estados Unidos. Todo esos datos indican que el régimen de Irak es más fuerte que el talibán en Afganistán.

La respuesta que pueda dar el régimen iraquí es imprevisible, porque aunque su ejército se debilitó tras la guerra de 1991 aún es poderoso. La respuesta puede significar bajas para los ejércitos de Estados Unidos y el Reino Unido, así como la extensión de la guerra en la región, ya que si el régimen iraquí ha amenazado con atacar Israel si es atacada por Estados Unidos, el gobierno de Israel ha anunciado que esta vez, a diferencia de la guerra de 1991, si responderá a un eventual ataque iraquí. Y si fuera cierta la denuncia de la Administración Bush de que el régimen iraquí dispone de armas de destrucción masiva, es más que probable que en una situación de guerra el régimen de Sadam Husein optara por utilizarlas, al menos contra Israel y los soldados angloamericanos.

Si triunfara la ofensiva militar angloamericana y derrocara el régimen de Sadam Husein, existirían muchas dificultades para garantizar la estabilidad en Irak, ya que, como hemos visto, la oposición iraquí no es una alternativa con garantías, un gobierno encabezado por un general estadounidense con presencia militar angloamericana en Irak no puede durar indefinidamente y hay que prever que los partidarios de Sadam Husein podrían plantear una lucha en las calles de las ciudades iraquíes y realizar acciones armadas contra el nuevo régimen que se instaurara y contra Occidente en general.

En el actual contexto del Próximo Oriente una intervención militar en Irak puede hacer aún más inestable e insegura la situación en esa región y es posible que se produjeran cada vez más respuestas de las poblaciones de los países árabes. Y una respuesta de las poblaciones árabes debilitaría aún más a los regímenes dictatoriales y corruptos árabes, que son aliados de Estados Unidos.

La guerra contra Irak puede perjudicar la economía mundial, que ya está actualmente en una situación de recesión y crisis bursátil.

En el interior de Estados Unidos hay sectores que no ven clara la apuesta de guerra de Bush. Al Gore, líder del Partido Demócrata de Estados Unidos, señaló dos peligros de una eventual guerra contra Irak: que reste capacidades para la lucha contra el terrorismo internacional y que con la guerra preventiva se genere más resentimiento y hostilidad hacia Estados Unidos. También es significativa la carta al Congreso del director de la CIA, George Tenet, y varios documentos secretos que se han desclasificado por orden parlamentaria y que el Congreso hizo públicos el 8 de octubre de 2002, que indican que la CIA no cree que el régimen de iraquí represente un peligro inmediato para Estados Unidos, salvo que se sienta acorralado ante un ataque militar estadounidense. La CIA considera muy poco probable que Sadam Husein lance una agresión contra Estados Unidos o sus aliados, aunque si considera que un ataque contra su país es inminente podría lanzar un contraataque químico o bacteriológico, o bien optar por una ayuda a terroristas islámicos para que atacaran Estados Unidos con armas de destrucción masiva.

Ante el posible ataque militar contra Irak se ha debilitado la alianza internacional antiterrorista que se constituyó tras el 11-S. A diferencia de EE.UU. y el Reino Unido, los otros miembros del Consejo de Seguridad (Rusia, Francia, China) y otros gobiernos (Arabia Saudí) consideran que Irak ha satisfecho las exigencias de la comunidad internacional al aceptar el retorno de los inspectores y que ahora no es necesaria una operación militar, sino que se trata de exigir al régimen de Sadam Husein que se realice la inspección. En todo caso, estos países sólo apoyarían un ataque militar si es respaldado por Naciones Unidas y, al igual que la mayoría de países árabes, no comparten el objetivo de derribar el régimen de Sadam Husein que pretende la Administración Bush, sino que defienden como único objetivo acabar con los

arsenales de armas de destrucción masiva que pueda poseer Irak. También hay que destacar la postura contraria a la guerra contra Irak del gobierno alemán, que ha anunciado que no colaborarán en el ataque militar aunque tenga el mandato de la ONU.

Los resultados de la gira que realizó el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, por diversos países árabes, Israel y Turquía (marzo de 2002), con el propósito de buscar apoyos para una acción militar contra Irak, fueron bastante desalentadores para la Administración Bush, ya que a excepción de Israel no encontró respaldo a un eventual ataque contra Irak. Sus interlocutores le manifestaron dos obstáculos principales: la crisis israelo-palestina (las poblaciones de Arabia Saudí, Jordania o Egipto están indignadas por la represión israelí de la segunda Intifada palestina) y el riesgo de inestabilidad y extensión del conflicto.

De todas formas no se deberían exagerar las oposiciones con las que se ha encontrado hasta ahora la Administración Bush, ya que ante cualquier obstáculo que encontraran los inspectores de la ONU en Irak todo podría cambiar y el Consejo de Seguridad autorizar el uso de la fuerza. Por otra parte, ningún país del mundo (China, Rusia, Alemania, Francia...) puede ni quiere rivalizar con Estados Unidos en el terreno militar, aunque no estén de acuerdo con la realidad unipolar en las relaciones internacionales y prefieran un mundo no tan hegemonizado por Estados Unidos.

Más importante es que la opinión pública europea se opone a un ataque militar contra Irak. Los casos de Gran Bretaña y España son bastante significativos, por el hecho de que sus gobiernos han apoyado incondicionalmente la orientación de guerra de la Administración Bush. Según una encuesta de *The Sunday Times* el 51% de los británicos se oponen al despliegue de tropas para atacar Irak, frente a un 40% que está a favor de unirse con Estados Unidos. Otra encuesta de opinión muestra que el 65% de sus ciudadanos se opone a una intervención unilateral de Estados Unidos y el Reino Unido, no aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso si Sadam Husein impide la inspección de sus fábricas, palacios y arsenales. Todos estos datos han hecho variar el discurso de Tony Blair, que ha pasado de un apoyo sin condiciones a los planes de Bush a reclamar la aprobación de la intervención militar por parte de la ONU, para que sea legítima, y decir que el objetivo no es derrocar al régimen de S. Husein sino desarmarlo.

Según una encuesta del Instituto Opina para *El País* (sus resultados se publicaron el 30 de septiembre de 2002), la inmensa mayoría de los españoles rechaza la guerra contra Irak (el 87,1%), que España dé apoyo logístico a la misma (el 71,9%) y que se envíen tropas españolas a esta guerra (el 80,9%). Además, rechazan la decisión de Aznar de apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irak (el 74,3%), es decir, una vez más, la opinión pública es contraria a la política defendida por el Gobierno, que consiste en lanzar rápidamente un ataque

militar contra el régimen de S. Husein. Finalmente, la mayoría cree, en todo caso, que un ataque contra Irak debe contar con la aprobación de la ONU (el 70,6%).

En diversas capitales europeas se han producido importantes manifestaciones ciudadanas contra la guerra en Irak, la más importante de las cuales fue la de Londres, el 28 septiembre 2002, en la que participaron entre 200.000 y 350.000 personas. Tras un ataque militar a Irak es probable que las manifestaciones se multipliquen y adquieran mayor masividad. Si la guerra es corta, los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido podrían asumir una respuesta ciudadana puntual, pero si la guerra se alarga y hay muchas víctimas angloamericanas las cosas se complicarían mucho para ellos.

Por todas las razones apuntadas, la ONU, la Unión Europea y la mayoría de los países que formaron parte de la coalición antiterrorista internacional apuestan, de momento, por la vía de los inspectores y la presión diplomática a Irak. La Administración Bush ha presionado a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que aprueben una nueva resolución en la que exija al gobierno iraquí el cumplimiento de las anteriores 16 resoluciones, la absoluta libertad para los inspectores, incluyendo su derecho a registrar los palacios presidenciales, y se anuncie las represalias bélicas que se adoptarán automáticamente en caso de un nuevo incumplimiento. Pero por el momento, Estados Unidos no ha tenido más remedio que renunciar al uso automático de la fuerza si las inspecciones son obstaculizadas por el régimen de S. Husein y comprometerse a consultar al Consejo de Seguridad antes de lanzar un ataque. La razón fundamental que les ha inclinado a aceptar que se agoten los pasos decididos por la ONU es la necesidad de que una intervención militar cuente con un amplio apoyo internacional. Y para ello, les vendría bien una resolución específica del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza, pero si esta no se produjera, ya tienen decidido que el ataque lo efectuarían en solitario o con el Reino Unido. En esas circunstancias, por desgracia, es de esperar una comprensión por parte de la mayoría de los gobiernos de los países que hoy no comparten los planes de Estados Unidos.

Ante la perspectiva de una actividad antiterrorista prolongada y guerras preventivas, en las que se prevé la utilización de operaciones encubiertas y la "guerra sucia", no es de extrañar que el gobierno de Estados Unidos se haya opuesto a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y propusiera (febrero 2002) terminar con los tribunales de la ONU para Ruanda y la ex Yugoslavia en el 2007-8, argumentando que tales tribunales ponen en peligro sus operaciones antiterroristas. El Gobierno Bush se opone a una estructura legal permanente que pueda interferir en sus operaciones o enjuiciar a sus soldados, como podría ser el caso de la CPI. Aceptar, como lo ha hecho la Unión Europea, la inmunidad de los militares norteamericanos ante la CPI y que sus posibles crímenes se juzguen en los tribunales de Estados Unidos equivale a conceder la impunidad.

### III

Para comprender la importancia estratégica que tiene el control del petróleo hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los expertos señalan que hay petróleo para unos cuarenta años y que la producción mundial del mismo podría llegar a su techo y empezar a descender hacia finales de esta década, lo que encarecería mucho su precio. Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el consumo de petróleo aumentará de los actuales 75 millones de barriles diarios a 120 millones diarios en el 2030. La gran mayoría de este aumento será consecuencia del consumo de los países industrializados. Por si todo ello no fuera poco, hay que tener en cuenta que los expertos también pronostican que la producción mundial de gas natural puede llegar a su techo entre el 2020 y el 2030.

Todos los datos indican que el consumo energético actual es insostenible y que se necesita un cambio urgente de los sistemas energéticos basados en los combustibles fósiles. Si a ello le añadimos la contaminación que generan sus emisiones de dióxido de carbono y sus efectos en el calentamiento global del planeta, lo más sensato es concluir que se necesitan otras opciones energéticas, sea la que defiende Jeremy Rifkin, basada en el hidrógeno, o la que han defendido los movimientos ecologistas, basada en el ahorro y la potenciación de las energías renovables (solar, eólica, hídrica, geotérmica...).

Pero la Administración Bush no ve las cosas de la misma manera. Su objetivo estratégico es el control del petróleo de la región del Golfo Pérsico y del Mar Caspio. Para que ello sea posible, quieren tener una presencia determinante en la zona, en forma de poder político-militar directo o a través de gobiernos sumisos que acepten una subordinación incondicional al Imperio. Y eso solo se puede materializar derrocando a los regímenes hostiles al poder de Estados Unidos, como el de los talibanes y el de Sadam Husein. Por esas razones, se puede afirmar que los intereses de las grandes compañías petroleras están implicados en la intervención militar en Afganistán y en los planes de guerra contra Irak.

El interés estratégico de la región del mar Caspio viene determinado por la existencia de grandes yacimientos de petróleo poco explotados (se estima que pueden llegar hasta ciento treinta y seis mil millones de toneladas, mientras que en el Golfo árabe-persa hay ochenta y cinco mil millones), gas natural, cinc, cobre, mercurio, uranio y oro. Pero en la región del Mar Caspio están presentes muchos intereses (empresas petroleras occidentales, Irán, Rusia) y es políticamente inestable y muy conflictiva.

¿Qué tiene que ver todo esto con Afganistán?. El transporte de gas y petróleo de la región, que hasta 1991 estuvo controlado por la Unión Soviética, es un motivo de disputa entre Rusia y Estados Unidos. Y Afganistán es esencial para el transporte del petróleo hacia el océano Índico y, a través de él, hacia las grandes concentraciones de actividad económica

industrial del mundo. Por ello, la Administración Bush quería derrocar el régimen talibán y sustituirlo por un gobierno que garantizara sus intereses.

Irak posee la segunda mayor reserva petrolera del mundo (112.500 millones de barriles a finales de 2001), después de Arabia Saudí (261.800 millones). Estados Unidos se sitúa a gran distancia de ellos (30.400 millones). Si en Irak se instalara un nuevo régimen controlado por Estados Unidos se puede prever un cambio sustancial en el mercado del petróleo. En ese nuevo escenario, acabaría el embargo al que está sometido Irak desde 1991 y con ello el país podría producir muchos más barriles (actualmente produce en torno a 1,5 millones de barriles diarios pero podría llegar en un par de años a los 6 millones de barriles diarios). Esa mayor afluencia de petróleo a los mercados abarataría su coste para los países importadores. Obviamente, los países industrializados, la mayoría de ellos occidentales, anhelan disponer de petróleo abundante y a bajo precio, porque, al ser un pilar básico de sus economías, tendría efectos positivos sobre las mismas (mayor crecimiento, menor déficit público...).

Especialmente interesado está Estados Unidos, por ser el mayor importador de petróleo del mundo y porque produce menos petróleo del que consume. En concreto produce 6 millones de barriles diarios pero en el año 2001 importó 11,6 millones de barriles diarios. Y la AIE prevé que las importaciones de petróleo de Estados Unidos ascenderán a 14,3 millones de barriles diarios en el 2010 y a 16,7 millones en el 2020. Por otra parte, hay que tener en cuenta que bastantes miembros de la Administración Bush están directamente vinculados al negocio petrolero (Dick Cheney y Condoleezza Rice trabajaron en compañías petroleras).

Para Estados Unidos el petróleo iraquí tiene otro interés suplementario. Sería una fuente de abastecimiento alternativa a la de Arabia Saudí. Un 20% del petróleo importado por Estados Unidos en el 2001 era de origen saudí. Pero las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí han empeorado mucho tras los ataques del 11-S, debido a la gran cantidad de ciudadanos saudíes pertenecientes a Al Qaeda, empezando por su líder Bin Laden, así como por la negativa saudí a que Estados Unidos utilizara su territorio para atacar Afganistán. Además, la Administración Bush teme una interrupción del suministro del petróleo como consecuencia de un mayor crecimiento de la influencia cada vez más fuerte del wahabismo, una rama radical del islamismo, en Arabia Saudí, incluso entre miembros de la familia real. Por esa razón, a Estados Unidos le interesa controlar el petróleo de Irak y las reservas del mar Caspio, que se prevé estará en pleno desarrollo hacia el año 2005. En definitiva, Estados Unidos persigue una diversificación mayor de sus fuentes de petróleo en esta región inestable, superando la actual dependencia respecto a Arabia Saudí.

Concedores de la importancia estratégica del petróleo, la Administración Bush y los pequeños grupos de oposición al régimen iraquí, en el exilio, han anunciado que si consiguen derrocar a Sadam Husein, el nuevo régimen, tutelado por Estados Unidos,

revisará las concesiones de explotación del petróleo, beneficiando a las compañías estadounidenses (Exxon Mobil, Chevron Texaco...) y a las de los países que apoyen la guerra, dejando fuera a las empresas de los estados que no apoyen el ataque militar contra Irak. La postura adoptada por George Bush trata de atraer aliados con el incentivo del petróleo y de avisar de las consecuencias negativas que comportaría una postura crítica frente a la guerra contra Irak, como la que mantienen actualmente países como Francia o Rusia, que tienen empresas petroleras que han iniciado negociaciones con el actual gobierno iraquí para la explotación de algunos yacimientos (la franco-belga Total Fina Elf, las rusas Lukoil y Solavneft).

Ahora bien, la opción de la guerra contra Irak por el control del petróleo no está exenta de riesgos. De momento, el efecto del anuncio de la guerra ha encarecido el precio del crudo. Por otra parte, una vez desencadenada la guerra se puede entrar en un período de inestabilidad política en el conjunto de países productores de petróleo de la región del Golfo Pérsico, de consecuencias imprevisibles, tales como eventuales interrupciones del suministro del petróleo. Y no hay que olvidar que Rusia, China, la Unión Europea e Irán van a competir fuertemente con Estados Unidos por el control estratégico del petróleo y el gas en Asia Central, el Golfo Pérsico y el Cáucaso, lo que puede provocar un aumento de las tensiones entre estas potencias.

#### IV

La única posibilidad realista, aunque difícil, de parar la cuenta atrás de la guerra es la movilización ciudadana. Por ello, las plataformas contra la guerra, no han esperado a que estallara la guerra para movilizarse. Es una buena ocasión para que el movimiento por la paz se reconstruya y vuelva a jugar un papel de presión internacional y para la colaboración entre las organizaciones pacifistas y las que forman parte de los movimientos de resistencia a la globalización, que deberían asumir de forma más decidida el “eje pacifista” de su lucha.

Todas estas organizaciones han denunciado las consecuencias negativas de guerras como la de Afganistán (muertos, heridos, desplazados, refugiados, refuerza el militarismo, más racismo y xenofobia...) y han condenado de forma rotunda el régimen dictatorial de Sadam Husein. Pero también reclaman el levantamiento del embargo y de las sanciones impuestas al pueblo de Irak desde la guerra del Golfo de 1991, por los impactos negativos que ha ocasionado a la población iraquí (muertes, enfermedades, malnutrición...). Los movimientos contra la guerra también reclaman la paz y una salida justa para el conflicto entre Israel y los países árabes. Y hacen hincapié en la necesidad de un diálogo entre el mundo árabe y Occidente y un diálogo interreligioso.

Los movimientos por la paz seguirán defendiendo una drástica reducción de los gastos militares, el desarme (abolición de las armas de destrucción masiva, reconversión de la industria de armas, puestos de trabajo alternativos...) y políticas de cooperación y gastos sociales, ya que si se toman medidas que contribuyan a sacar de la miseria a las dos terceras partes de la humanidad (anular la deuda de los países pobres, que los países ricos dediquen al menos el 0'7% de su riqueza a financiar el desarrollo, establecer una tasa internacional para las transacciones financieras...) se podrían solucionar o mejorar muchos de los conflictos armados existentes.

Como se comprobará, el reto para los movimientos sociales es grande y la necesidad de una respuesta amplia a la ofensiva militar del Imperio es urgente.

E.P., *Sabadell, octubre 2002.*